

El ¿saldo? de la guerra de Calderón contra el narcotráfico

José Luis Piñeyro*

El fenómeno del narcotráfico y en general del crimen organizado y del común, no puede entenderse si no se subraya un punto de partida analítico central: este fenómeno es un problema estructural y no provisional donde economía y política están articulados, reflejado tanto a nivel microsocioal como macro a través de dimensiones cambiantes: en conductas y valores individuales y colectivos cotidianos y de emergencia, en distintas formas de agrupación y cohesión o desintegración de la sociedad, en diversos sectores de bienes y servicios de la economía, así como en diferentes gobiernos sean municipales o estatales o el federal, y en las instituciones del Estado mexicano.

Presentación y precisiones

El artículo consta de tres secciones principales que resumiremos en algunos de sus aspectos centrales. En la primera hacemos una aproximación a los saldos humanos negativos más allá de los reconocidos oficialmente, es decir, a los miles de narcoejecutados, quienes son únicamente la punta del iceberg o témpano de otros significativos costos sociales ocultos o subestimados en la contabilidad gubernamental. Así se pretende legitimar la estrategia antidelinquencial de Calderón y al gobierno mismo, bajo la conocida consigna de que “no hay de otra” estrategia posible y viable, argumentando que todas las críticas y propuestas alternativas o comple-

mentarias a la misma son irracionales, inviábiles, “ideológicas”, etcétera.

¿Ideológicas?, como si la óptica guerrillera no fuera parte de la ideología neoliberal que sostiene que primero debe haber seguridad pública para los ciudadanos y, por supuesto, para los capitales nacionales y foráneos que requieren de orden y paz para invertir, y después vendrá la prosperidad económica vía derrama de empleos y consumo que generará progreso social, como si no fuera una obligación gubernamental y estatal brindar a la nación tanto la seguridad pública como la seguridad nacional en sus múltiples vertientes: la laboral, la social, la educativa, la ambiental, entre otras. Primero hay que producir el pastel económico social para después supuestamente repartirlo entre todas las clases sociales, planteó por décadas a lo largo del siglo pasado la ideología del desarrollismo, y hoy también, por más

de tres decenios, la del neoliberalismo en éste y el presente siglo. Ayer, como actualmente, la nación sigue esperando el reparto de los panes y el vino.

En la segunda sección también haremos un acercamiento provisional y breve sobre los cuantiosos costos económicos o materiales del combate antinarcóticos. Y es provisional, dado que al igual que los costos humanos, ambos han ido en aumento, de tal forma que como falta casi un año para que termine el trágico sexenio de Felipe Calderón —el del desempleo masivo y creciente, el de la pobreza ascendente y el de la inseguridad pública crónica—, los saldos sociales y económicos finales no los conocemos de cierto. Seguramente los costos humanos serán más dramáticos y sangrientos en víctimas —eufemísticamente llamados “daños colaterales” de la guerra calderonista— que hoy, a inicios del 2012. Los costos económicos de

* Profesor-Investigador del Departamento de Sociología de la UAM-Azcapotzalco.

igual forma van a incrementarse, afectando la atención de otras necesidades nacionales.

Como tercera y última sección, efectuaremos una somera reflexión de cómo la llamada guerra y la propia estrategia anticriminal no tienen futuro si no se incorporan, entre otras tácticas, la de la participación social amplia y una política económica de Estado generadora de empleo masivo, permanente y bien remunerado, y una social de atención estructural a la millonaria pobreza en que sobrevive más de la mitad de la población: 55 millones de compatriotas pobres y pobres extremos, cifras oficiales; las extraoficiales llegan a 70 millones. Excelente caldo de cultivo de donde se surte y reproduce el narcotráfico y el crimen profesional con un porcentaje mínimo de tales millones. Una generación masiva de empleo y una reducción drástica de la pobreza significaría “quitarle gran parte del agua al pez del narcotráfico”, como se diría en términos contraguerrilleros; la otra parte implicaría sanear y reconstruir al Estado y a la nación mexicana.

Con otras palabras, el fenómeno del narcotráfico y en general del crimen organizado y del común no puede entenderse si no se subraya un punto de partida analítico central: este fenómeno es un problema estructural y no provisional donde economía y política están articulados, reflejado tanto a nivel microsocioeconómico como macro a través de dimensiones cambiantes: en conductas y valores individuales y colectivos cotidianos y de emergencia, en distintas formas de agrupación y cohesión o desintegración de la sociedad, en diversos sectores de bienes y servicios de la economía, así como en diferentes gobiernos sean municipales o estatales o el federal, y en las instituciones del Estado mexicano.

Parcializar el análisis de dicho fenómeno, olvidando su carácter estructural, sólo sirve, por una parte, para ocultar el nexo indisoluble entre lo material y lo moral que cementa y reproduce a la economía y a la sociedad mexicanas; y por otra, para proponer no únicamente soluciones parciales y, por tanto, inútiles, o al menos insuficientes¹ para enfrentar ese fenómeno, y también para obscurecer a los beneficiarios principales del *status quo* bélico en México y a los principales sectores y clases sociales dañados por tal *status*, bajo el lema de que “la violencia afecta a todos, sin distinción de clase social”. Sí, pero no es igual el impacto negativo de cualquier guerra o conflicto político de diversa índole; no se afecta por igual a todos los miembros de una comunidad; siempre hay “triunfadores y perdedores”, como hoy lo plantea el lenguaje sociológico y común neoliberal.

¹ Esas “soluciones” o reduccionismos analíticos los abordo en Piñeyro, 2010.

Antes de pasar a abordar los tres apartados medulares mencionados, y realizado un telegráfico punteo metodológico, cabe hacer una última precisión. No podemos hablar en singular de “el saldo” de la guerra antinarcóticos de Calderón: son los saldos, en plural. Todos bastante negativos, unos perceptibles a simple vista, como los miles de muertos; otros, los heridos y los desaparecidos²; otros más son imperceptibles u ocultos o bien ocultados: las miles de viudas, niños huérfanos y las personas traumatizadas psicológicamente. También la memoria colectiva no registra los multimillones de pesos del presupuesto gastados durante este sexenio y otros más en seguridad pública y nacional, en detrimento de otras seguridades como la social y la laboral, entre otras antes nombradas.

Costos extras de la contienda bélica anticriminal calderonista aparecen mucho más ocultos o difuminados, casi desapercibidos: primero, la silenciosa migración masiva interna hacia Estados Unidos de sectores medios y empresariales de ciudades fronterizas³ y norteamericanas y del interior de la República, cuyo impacto en términos de descapitalización monetaria y humana no se ha cuantificado respecto a mayor desempleo regional, pérdida de fuerza de trabajo calificada e incluso con nivel universitario; segundo, la desintegración familiar y el abandono de miles de niños y jóvenes, otro terreno fértil para engrosar las filas del narcotráfico; tercero, la desocupación de miles de viviendas, de las que paradójicamente existe un enorme faltante a nivel nacional; y cuarto, una situación que es muy difícil de cuantificar, de dar cifras certeras o aproximadas, o sea, el paso de lo cuantitativo y cualitativo a lo cualitativo subjetivo, algo que certeramente un analista cataloga como “el vivir con miedo”⁴.

² Una crónica estremecedora de las narraciones de familiares de las personas desaparecidas o “levantadas”, e igualmente de la corrupción, impunidad e ineptitud gubernamental para atender sus denuncias, se puede consultar en Pérez, junio de 2011.

³ Sólo en Ciudad Juárez se calcula una migración al vecino país norteamericano y al interior de México de más de 100,000 juarenses y el cierre de más de 5,000 negocios (consultar Benítez, 16 de febrero de 2010: 11).

⁴ Frase dramática acuñada por Kliksberg cuando analiza la estrategia anticriminal de mano dura o cero tolerancia, frente a delitos menores o mayores tan de moda política en la mayoría de los gobiernos latinoamericanos. Estrategia de la que el autor muestra sus insuficiencias y el meollo del problema de la criminalidad común y profesional: el modelo económico neoliberal que genera exclusión educativa y laboral y desintegración familiar entre la población en general y en particular en la joven en comparación con el modelo de países europeos nórdicos donde la juventud tiene garantizada su no exclusión e integración (Kliksberg, mayo-junio de 2008). Asesor de la Dirección del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, asienta el especialista de manera categórica: “La criminalidad significa *todo tipo de daños para la sociedad*. En primer término, por las *vidas perdidas*. . . También por las *pérdidas materiales* que ocasiona, porque distorsiona los *presupuestos* presionando a los gobiernos a gastar en seguridad

O sea, la cotidiana vivencia del miedo, el horror o el terror que puede generar o no conductas violentas o depresivas; de abulia frente al trabajo o la educación; de ausentismo laboral o educativo; de accidentes de trabajo, de suicidios, de conflictos intra e interfamiliares; de drogadicción infantil o juvenil con drogas lícitas (alcohol, tabaco y fármacos) e ilícitas de tipo natural o químico; o “simplemente”, vivir con actitudes de alerta o tensión permanente frente al alto índice de violencia criminal y estatal y de delitos comunes y de alto impacto como son la violación sexual, el secuestro, la extorsión y la desaparición forzada o “levantón”, que normalmente termina en el asesinato de la víctima.

Desde otro ángulo analítico y prospectivo, hay saldos que no son posibles de visibilizar de momento y que sólo aparecerán a mediano y largo plazo. Es decir, costos que, como después de cualquier conflicto bélico o, mejor dicho, de una situación de violencia extrema durante un extendido tiempo y espacio en el territorio nacional, indudablemente aparecerán. Dichos costos serán la conjunción de personas sobrevivientes que pasaron de ser niños a jóvenes o de jóvenes a adultos⁵, y de adultos a ancianos. Todos con carencias educativas y productivas, con traumas físicos o psicológicos, con necesidades materiales y morales insatisfechas, y sin perspectiva futura de satisfacerlas y de una vida digna y justa.

De momento, hoy por hoy vivimos una situación en la que aceleradamente se desperdicia el famoso bono demográfico de México, esa población joven en edad educativa y productiva que, por un lado, se mata entre sí: el joven policía o militar que mata al joven sicario; el joven sicario que asesina al joven inocente o drogadicto; el joven uniformado que elimina al joven narcomenudista, y así en una espiral de violencia y muerte. Y, por otro lado, se encuentran los siete y medio millones de jóvenes catalogados como la generación de los “ninis”: ni estudian ni trabajan, y ni tienen

en lugar de realizar inversiones prioritarias en desarrollo humano, y por los cuantiosos costos intangibles, imposibles de medir, derivados del hecho de vivir con miedo” (27. *Cursivas nuestras*).

⁵ Esa cadena biológica, niño-joven-adulto, cuando se reproduce (no siempre sucede así, a veces se rompe en el primer eslabón con la muerte infantil) ya empieza dañada: “La violencia en México ha tenido un conjunto de implicaciones para la sociedad, y específicamente para el bienestar y el desarrollo de los niños. Por ejemplo, ha erosionado la capacidad de los adultos para proteger, alimentar y cuidar a los niños. La mayoría de los adultos asesinados son padres... Sólo en Ciudad Juárez, la guerra ha dejado 8,500 huérfanos. Proyectando esta cifra a nivel nacional, es posible que haya 50,000 huérfanos por la guerra a las drogas... No existe duda de que la exposición a la violencia, la privación, el miedo y la tensión, afectan el desarrollo de los niños aun antes de nacer” (Barra y Joloy, 2011: 33 y 36. *Cursivas nuestras*).

futuro, agregaría. Pero esto no debe sorprender a nadie, si consideramos que el gobierno de Calderón es un “gobierno nini”: ni da empleo y educación a la juventud, la adultez y la ancianidad, sólo les ofrece opción como empacadores de supermercados; ni ofrece resultados a otros problemas nacionales como alimentación y salud; ni tiene políticas gubernamentales integrales para problemas estructurales como la extendida inseguridad pública nacional.

Así, por ejemplo, la política calderonista para enfrentar la inseguridad pública frente al crimen profesional y ocasional, y en especial de cara al narcotráfico, descansa en una táctica rectora: descabezar los cárteles de la droga con el objetivo de atomizarlos y restarles capacidad de violencia paramilitar, de corrupción gubernamental y social, y de incidencia delictiva. Tal objetivo hasta ahora no se ha cumplido, pues los capos de las organizaciones delictivas son remplazados con facilidad después de un corto periodo de lucha y rearticulación interna y alianza con otro cártel, dado que el negocio es muy lucrativo en multimillones y que hay una larga lista de espera en la estructura delincencial. Aun si esta meta se lograra, la división de las siete grandes narco-organizaciones en 20 o 25 minicárteles no es garantía de que disminuirían los niveles de violencia, la historia sin fin como lo es la famosa y supuesta guerra antinarcóticos.

Otros objetivos o tácticas de la estrategia mencionada para golpear la red organizativa, operativa y logística del narco son los arrestos de algunos capos, de miles de cuidadores de sembradíos, transportistas, bodegueros, narcomenudistas, etc.; el decomiso de miles de armas personales y de alto poder y cartuchos; de toneladas de drogas naturales y sintéticas; de millones de dólares y pesos; la destrucción de laboratorios y plantíos de marihuana y amapola; la confiscación de inmuebles como casas, ranchos, etc., así como la de miles de muebles como autos y aviones. Todas estas acciones son fácilmente contrarrestadas: los detenidos son remplazados con una pequeña porción del ejército de reserva de pobres y desempleados rurales y urbanos; las confiscaciones, mediante la adquisición de nuevo armamento en Estados Unidos y de más bienes inmuebles y muebles, así como con la renta o compra de nuevas tierras de sembradío. En fin, la guerra sin fin.

Lo que aquí queremos destacar es que el apresamiento de miles y miles de narcos y de delincuentes de baja y mediana jerarquía⁶, donde predominan los delitos menores, no

⁶ Los últimos 10 años la población carcelaria de México casi se duplicó: pasó de 154,765 personas en el año 2000 a 223,350 presidiarios en el 2010; en la ciudad capital, de 2002 a 2009 aumentaron en 84% los encarcelados (Pérez Correa, junio de 2011: 35).

únicamente tiene una orientación clasista, son los sectores sociales más desprotegidos de la sociedad, sino que también parece ser el objetivo central de la estrategia anticriminal: llenar más las sobrepobladas cárceles del sistema penitenciario. Dicho objetivo fue refrendado por el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, al anunciar recientemente la construcción con capital privado de nuevos penales normales y de alta seguridad, cuando la solución más justa, eficiente y económica sería liberar a los presos por delitos menores y de baja peligrosidad.

Lo anterior incrementará no sólo el enorme costo económico (calculado en 120 pesos diarios por preso) que tal sistema implica (un alto porcentaje son ¡presos no sentenciados!) sino otro pernicioso costo social oculto: los hijos de esos presidiarios y presidiarias, los miles de niños y jóvenes sin padres, no incluidos entre los costos globales de la represiva y sangrienta contienda bélica antidelincuencial del gobierno calderonista. Menores de edad que con muchas dificultades van a poder insertarse en la sociedad en el plano educativo y laboral, para no decir el afectivo y el valórico positivo, que son igual de importantes que los primeros⁷.

Paradójicamente, a pesar de la anterior presentación de los altísimos costos sociales tanto públicos como ocultos de la guerra antinarco, Calderón plantea en su estrategia antidelincuencial como objetivos centrales: la recuperación del control territorial de ciertas narcorreiones y el control social de ciertas poblaciones en manos del narcotráfico, claro, a sangre y fuego, para después proceder, nada menos, que a la reconstrucción del tejido social mexicano!

I. Los saldos sociales y económicos y las apologías de la “guerra”

Después de este sombrío panorama sociopolítico, tanto de actualidad como de proyección futura, pasemos a tratar con mayor detalle los costos o saldos sociales negativos arrojados por la contienda bélica calderonista. En primer lugar se encuentran los narcoejecutados, que a inicios del 2012 la cifra oficial arroja hasta el tercer cuatrimestre del 2011, un total de 47,000 personas (Ibarra, 2012). De ellas,

⁷ Asienta de forma contundente y esclarecedora una analista que el encarcelamiento de padres o madres tiene en los niños o niñas “una correlación positiva con *conductas negativas* como: abuso de sustancias nocivas, embarazos en la adolescencia (hasta un 40% más que otros niños), problemas de ansiedad, sentimientos de soledad, tristeza, enojo, resentimiento y abandono, y distintos problemas de salud” (Pérez Correa, 2011: 38. *Cursivas nuestras*).

se reconoce que 90% son delincuentes de distinta jerarquía y de diferentes organizaciones delictivas, más los policías municipales, estatales o federales y militares fallecidos. El resto, 10%, se afirma que corresponde a civiles inocentes eliminados en fuego cruzado entre delincuentes y fuerzas armadas y policíacas durante operativos, o bien en persecuciones. De ser cierto el total de narcoejecutados y el porcentaje gubernamental aludido, éste sumaría la nada despreciable cantidad de 4,700 “daños o víctimas colaterales” de la contienda bélica.

Tal porcentaje, sin embargo, resulta increíble, pues no da cuenta, por ejemplo, de los civiles asesinados en retenes carreteros rurales y urbanos, de arrestos equivocados de civiles, de drogadicotos ejecutados en centros de rehabilitación, etc. La estadística y el costo humano aumentan si se suman los desaparecidos o levantados, cuya cifra oficial militar se calcula en 18 mil desaparecidos forzados (Rodríguez, septiembre de 2011: 26), cálculo que coincide con lo que reportan distintas organizaciones de derechos humanos, lo que a su vez significa otras 18 mil familias moralmente destrozadas. Poco a poco van apareciendo en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y otros estados, las narcofosas compuestas por migrantes ilegales centroamericanos, secuestrados no rescatados o con pago de rescate pero asesinados, extorsionados renuentes, mujeres violadas, entre otras categorías de desaparecidos forzados.

Se incrementan más las cuentas macabras si agregamos a los heridos durante los hechos de violencia criminal o estatal; éstos, como es normal, presentan diversos tipos de lesiones, desde leves hasta incapacitantes para estudiar o laborar o simplemente para llevar una vida normal. Los recuentos oficiales no informan de estos costos sociales ocultos y de gran relevancia por su cuantía y por las conocidas restricciones de acceso a la asistencia médica y hospitalaria que todos conocemos, e igualmente por las dificultades para obtener un certificado de incapacidad física en las instancias oficiales de asistencia social.

Empero, el conteo de los llamados daños colaterales de la guerra calderonista no termina con los rubros anteriores. Es necesario añadir a las viudas, huérfanos y dependientes de quienes son narcoejecutados o resultan totalmente discapacitados. Se estima una cifra de 100 a 150 mil viudas y huérfanos (Arango, 5 de septiembre de 2011: 47-50), que no incluye a los familiares de policías y soldados fallecidos en acciones antinarco, dado que cuentan con seguro de vida y pensión y atención médica. Éste conglomerado poblacional olvidado fue sacado a la luz pública por primera vez por el ahora ex gobernador de Chihuahua, José Reyes

Baeza, quien no únicamente destapó esta cifra gris durante los Diálogos por la Seguridad convocados por Calderón, sino que propuso la necesidad de crear un fondo social para estas víctimas de la tragedia nacional (Poder Ejecutivo Federal, 2010: 48).

Desgraciadamente, los costos sociales de la guerra calderonista no finalizan con el rubro anterior; es imprescindible incorporar otro saldo: los miles de niños, jóvenes, adultos y ancianos psicológicamente traumatizados por haber presenciado incidentes de gran violencia y vivir en zonas de alto riesgo o en ciudades con violencia crónica como Ciudad Juárez, por mencionara a la urbe más tristemente emblemática de tal fenómeno.

Al respecto, valga el ejemplo del ex secretario de Salud, José Ángel Córdova, quien informó que en esa ciudad había escasez de analgésicos y calmantes en las farmacias. Cabría preguntar: ¿será esa la situación sólo en esta ciudad fronteriza, o en otras más? Tijuana, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, ¿tendrán un surtido suficiente de tales pastillas? E incluso otras del interior del país en estados como Guerrero o Michoacán. Además, exista o no suficiente surtido medicinal, lo importante es que el consumo satisfecho o no, denota una demanda que apunta hacia otro fenómeno caracterizado por grandes niveles de miedo, ansiedad y desesperación entre la población que, a no dudar, desencadena diferentes padecimientos y enfermedades psicológicas. ¿Existirá un censo o algo parecido de la cobertura poblacional con tales padecimientos? Es de dudarse muchísimo, pero lo innegable es que éste es otro saldo negativo de la supuesta guerra de Calderón que es necesario contabilizar en los llamados “daños colaterales” humanos.

Los datos y reflexiones anteriormente expuestos nos dan una idea de conjunto más completa del monto o dimensión de la enorme sangría física y daño psicológico que excede por mucho a lo reconocido por la administración de Calderón y que se restringe a los narcoejecutados, que no son nada pocos ni tampoco bien contabilizados, sobre todo para las víctimas inocentes.

A pesar de la inmensidad de la tragedia social recién reseñada y comentada, el gobierno de Calderón se resiste a darle importancia. Tragedia inocultable, aun partiendo solamente del indicador referido al total de narcoejecutados reconocidos de manera oficial. Es decir, Calderón reitera en sus múltiples declaraciones a la prensa que él siempre y desde un principio informó a la nación que la guerra sería “larga y sangrienta”, o sea, de carácter transexenal y dolorosa, refrendando con información optimista como la expresada por su ahora ex procurador general, Eduardo Medina Mora:

“la guerra se va ganando, aunque no lo parezca”. Cinismo soterrado u optimismo irresponsable aparte, lo innegable es que aun ciñéndonos al indicador gubernamental aludido, el costo social múltiple es pavoroso desde cualquier perspectiva política, claro, con un mínimo de moral cristiana o, para términos prácticos, laica.

Las comparaciones que se hacen para criticar el desvergonzado optimismo de Calderón son las actuales guerras de invasión y ocupación territorial de Estados Unidos en Irak y Afganistán, donde el número de soldados muertos de esta potencia imperialista no ha sobrepasado al de los narcoejecutados mexicanos. Claro, esta visión no incorpora a los militares heridos y, por supuesto, excluye del todo a los miles y miles de muertos, lesionados y traumatizados de la población civil de ambos países invadidos, más el éxodo de un millón 500 mil iraquíes a diversas naciones árabes, la destrucción de viviendas, hospitales, centros educativos, museos, carreteras, centros de abasto de agua, que hoy alegremente los contratistas norteamericanos reconstruyen después de la destrucción provocada por la intervención aliada imperialista. A todo esto prestan oídos sordos los apologistas del gobierno sean analistas de medios, académicos y las mudas organizaciones no gubernamentales que sí son tales.

La justificación más sórdida y vulgar de la inhumana estrategia contra narcóticos calderonista se planteó en un foro académico celebrado en una institución de educación superior militar. Paradójicamente, el defensor de tal estrategia, un académico civil, argumentaba que tomar el número de muertos como un indicador relevante de la derrota de tal guerra era simplista y tendencioso, pues éste servía para mostrar todo lo contrario. Para ello, tomaba el ejemplo de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra mundial, la que, a pesar de haber sufrido el mayor número de soldados fallecidos, entre 25 y 30 millones, había ganado la guerra antinazi fascista del eje Berlín-Roma-Tokio. Claro, olvidó nuestro apologeta que dicha unión resultó victoriosa en alianza con Estados Unidos e Inglaterra y otros aliados menores.

Olvidó el defensor lo incomparable de una guerra convencional (con frentes y retaguardias de guerra definidos, con enfrentamientos clásicos entre ejércitos, con mando y organización centralizada, armamento de grueso calibre, con una moral bélica tanto en el Estado como en la nación, con derechos para los prisioneros de guerra, si bien muchas veces limitados, etc.) con la supuesta guerra de Calderón, que no cuenta con ninguno de estos rasgos. Tampoco consideró el apologeta gubernamental que no

puede confundirse con la guerra de liberación nacional soviética frente a la ocupación alemana, el papel fundamental de la población en la resistencia guerrillera y no armada, el que de los millones de bajas soviéticas una gran proporción era de civiles, etc. En fin, que, como se dice en mexicano, no hay que confundir “la gimnasia con la magnesia”: una guerra donde la conjunción de los elementos materiales y morales fueron fundamentales, a veces más los últimos que los primeros, como sucedió en el largo sitio alemán a la heroica ciudad de Leningrado.

Por el contrario, Calderón, el triunfo de la llamada guerra lo apuesta sólo a los factores burocrático-organizativos y técnicos (mayor coordinación y cooperación interinstitucional en México y con Estados Unidos, mando policial centralizado, por un lado, y por otro, más y mejores soldados y policías, más armamento moderno, equipo de comunicación cibernético, terrestre, aéreo, etc.), subestimando al máximo el elemento moral de la nación, y cuando lo apela se refiere a la voluntad política de su liderazgo y de la burocracia militar y civil del Estado (Piñeyro, 2010). No hace referencia a la voluntad colectiva, únicamente la requiere de forma pasiva: para avalar como resignada y acrítica víctima de la violencia criminal y estatal la supuesta estrategia triunfante anticriminal.

En fin, de esa desproporcionada y tendenciosa comparación/justificación del episodio bélico y heroico de la Unión Soviética con la actual situación de inseguridad en México, a veces el mismo Calderón pasa al máximo del cinismo y el autoelogio, como cuando, comparándose con el líder inglés Winston Churchill, un verdadero estadista, de derecha, pero estadista al fin, declaró que él al igual que Churchill durante la segunda conflagración mundial, sólo podía ofrecer al mexicano, como Churchill al pueblo británico: “sangre, sudor y lágrimas”.

II. Costos económicos bélicos y descomposición estatal y social

Pasemos ahora a enumerar y reflexionar sobre los costos económicos negativos que ha implicado el mantenimiento de la contienda bélica calderonista, y los efectos positivos de esos dineros públicos si se hubieran gastado en satisfacer las inmensas necesidades sociales en México. Resulta necesario aclarar que las estadísticas sobre el presupuesto público dedicado a seguridad pública y seguridad nacional es aproximativo, pues hay partidas presupuestales cuyo uso y función real no son del todo claros. Lo incuestionable es el gasto multimillonario en ambas seguridades, lo cual se

puede ver, por un lado, en el privilegio de la pública sobre la nacional, la militarización y “securitización” sobre la nacional en sentido integral (seguridad laboral, social, educativa, habitacional, ambiental), donde prevalece la seguridad física personal y familiar, así como la patrimonial, a las pocas o muchas propiedades; y por otro, en el obvio derroche monetario que ha servido para que analistas propios y extranjeros acuñen la frase: “por dinero, no ha quedado” suspendida la estrategia anticriminal de Calderón.

Ahora bien, la desproporción absoluta del gasto público anual en la guerra calderonista se evidencia cuando se apunta que en 2009 se gastaron 104 mil 907 millones de pesos para el funcionamiento de las secretarías de Defensa Nacional, Marina, Procuraduría General y de Seguridad Pública federal, monto superior al que correspondió a secretarías como Salud, Desarrollo Social, Medio Ambiente y Recursos Naturales, o bien a la de Comunicaciones y Transportes, o más de la mitad de la de Educación Pública. Presupuesto que privilegió a la Secretaría de Seguridad Pública, la favorita de Calderón, la más costosa, y también la más ineficiente en resultados y con poca transparencia en el uso presupuestal. Ésta ha gozado de un escandaloso aumento anual: 13 mil 664 millones de pesos en el año 2007, 19 mil 711 millones en 2008, y 32 mil 916 millones en 2009 (Bastidas, 25 de agosto de 2009).

Este escandaloso desequilibrio presupuestal entre secretarías del Estado mexicano reconfirma lo antes planteado al principio del ensayo: la subordinación de las necesidades e intereses de la seguridad nacional a las de la seguridad pública, más privada que pública. A lo anterior se puede agregar otra reflexión y comparación más amplia e ilustrativa sobre el silencioso desequilibrio recién expuesto.

En tal línea de argumentación, un experto revela y denuncia que el Sistema Nacional de Seguridad Pública consumió una suma estratosférica: 194 mil 500 millones de pesos entre los años 1996 y 2010. El analista, al realizar comparaciones, señala que dicho monto alcanzaría para reconstruir al devastado país de Haití y que sobraría 10%; cubriría la mitad del costo causado por el terremoto de 2009 a la economía de Chile; alcanzaría para la construcción de 620 mil viviendas de interés social en México; representa 30% de la fortuna de Carlos Slim, el mayor multimillonario a nivel mundial; serviría para pagar ocho años del presupuesto de la UNAM, construir nueve líneas del metro capitalino, otorgar 4.6 millones de becas de licenciatura, cubrir 116 años del presupuesto de la Presidencia, o 216 del de la CNDH; pagar el faltante salarial de los policías municipales por 12 años, o 50 del presupuesto de la PGR (López Portillo, 16 de marzo de 2010).

Todo lo anterior, de nuevo, se puede resumir en la conocida frase mexicana “por dinero no paramos”. Empero, son dineros públicos, no privados, que por lo tanto muestran dos cuestiones. Primera, el modelo incremental de seguridad pública que priva en casi todo el mundo, donde las agencias policiacas, judiciales y carcelarias siempre piden más y más presupuesto (para México es mucho más escandaloso por los niveles de pobreza y miseria, y los de riqueza personificados por Carlos Slim y el resto de la oligarquía trasnacional⁸) muchas veces al margen del cumplimiento de los objetivos propuestos. Segunda, que en nuestro país dicho modelo se ha exacerbado en el plano humano y material = más violencia criminal y paramilitares, más violencia estatal y más soldados y policías, más armamento moderno criminal, más armamento sofisticado para las fuerzas federales, más corrupción delincencial, más salarios y prestaciones para policías y militares de élite. Espiral presupuestaria y de violencia interminable, donde los principales invitados de piedra de la tragedia nacional son las víctimas civiles y sus familiares y los servidores públicos honestos y eficientes.

Dicho modelo incremental ha ocultado varias cuestiones obvias que de tan evidentes se olvidan. Primera, ningún Estado del mundo puede competir con el crimen organizado en el otorgamiento de salarios o prebendas. Segunda, las labores de inteligencia civil y militar conjuntas son esenciales para activar operativos cualitativos más que cuantitativos y espectaculares. Tercera, el elemento moral en cualquier guerra o catástrofe nacional, sea humana o natural, es fundamental para superarla, contar con los integrantes de la burocracia civil y militar del Estado mexicano, pero también con la nación. Participación que no ha sido convocada de forma permanente y amplia por el gobierno de Calderón más que de manera formal, ritual y reducida a ciertos grupos del sector empresarial, eclesiástico, académico y burocrático.

Cuarta y última cuestión, algunos analistas insisten en que el aumento exponencial del presupuesto en seguridad pública debe ser evaluado más que en razón de dicho aumento, en función de los resultados tangibles referidos a los objetivos planteados. Dichos resultados brillan por su ausencia, pues en el Estado mexicano y en particular en las secretarías responsables de la seguridad pública, así como en la cadena de seguridad y justicia (el sistema policiaco-

⁸ Luis Méndez y Othón Quiroz hacen una magnífica aproximación histórica reciente del desequilibrio entre la oligarquía y el sindicalismo respecto a concentración laboral, de sectores dinámicos, ganancias y poder político de la primera frente a la atomización sindical organizativa e ideológica y de derechos laborales (Méndez y Quiroz, julio-agosto de 2010).

judicial-penitenciario), prevalece la corrupción política, la impunidad policial y judicial, la ineficiencia administrativa, la poca transparencia presupuestal, la falta de una formal rendición de cuentas presupuestal y programática, y de un personal profesional de carrera. En pocas palabras, predomina un Estado opaco, ineficiente, patrimonialista, ¿fallido o con fallas?, como está de moda política catalogarlo por sectores burocráticos o académicos norteamericanos y del propio país, ¿o en descomposición?, que requiere una profunda reforma política y administrativa.

Descomposición del Estado que puede ilustrarse de diversos modos, por ejemplo, mediante la masiva y sistemática desertión de soldados y policías, sea para pasarse a las filas del crimen organizado, dedicarse a otros oficios en compañías de seguridad privada o emigrar a Estados Unidos, entre otras alternativas laborales. La estadística oficial arroja un total de 114,323 desertores de 1994 al año 2000. Durante el sexenio de Fox fueron 123,218 evasores; y el primer año del gobierno de Calderón, 15,656 (Benítez, 2009: 291), y cerca de 69 mil en los siguientes cuatro años, más una cifra no sistematizada de policías municipales, estatales y federales. Además del aspecto cuantitativo, es imprescindible agregar el cualitativo: del año 2000 al 2010 han desertado mil 680 soldados de las fuerzas especiales (*Milenio*, 7 de marzo de 2011: 17). Combatientes de élite (con entrenamiento en uso de armamento de alto poder, técnicas en explosivos y defensa personal, labores de inteligencia, guerra psicológica, etc.)⁹, quienes además de acciones bélicas en favor del narco han fungido como jefes e instructores de los reclutas militares o civiles para integrar organizaciones paramilitares como los Zetas y los Pelones.

Empero, la descomposición estatal va acompañada de la descomposición de amplios sectores de la sociedad mexicana mediante actitudes anómicas o francamente delincuenciales, en particular entre los jóvenes (narcomendistas, contrabandistas, robautos, traficantes de niños y mujeres, sicarios, etc.), pero asimismo entre la población adulta. Actitudes delictivas cuya mayor degradación salarial y moral sucede entre los jóvenes sicarios, quienes se contratan por un sueldo semanal promedio de mil 500 pesos sin límite

⁹ Los temibles y sanguinarios Zetas se formaron con estos desertores que al principio pertenecieron al cártel del Golfo y que después se independizaron y formaron su propio cártel, más los Pelones del cártel de Sinaloa, nutrido de esos militares de élite y de tropas regulares. Igual de importante es que los miembros de dicha élite tienen capacidad para fungir como adiestradores de soldados regulares o de civiles, reproduciendo los grupos paramilitares de los diferentes cárteles. Por ello se habla de Zetas de tercera generación e incluso de la importación de soldados desertores *Kaibiles* de Guatemala.

de personas a asesinar. Años atrás, un asesino profesional cobraba 2 o 3 mil dólares por eliminar a una persona sin dañar a sus acompañantes; hoy, las ejecuciones grupales son indiscriminadas, con gran saña y terrible desprecio por las víctimas: las ven como cosas o animales y no como seres humanos, priva una inocultable y aterradora cosificación o deshumanización de las personas sacrificadas.

Actitud amorala que la resume una dramática frase de los actuales sicarios: “preferimos vivir poco, pero bien, que mucho pero mal”. Este es otro saldo social oculto que si bien no se inició con la guerra calderonista, sí se ha ampliado cuantitativa y cualitativamente: ahora abarca a cientos de jóvenes e incluso a niños sicarios. ¿Podrán rehabilitarse psicológicamente y readaptarse socialmente en nuestras carenciadas cárceles juveniles? Se van a requerir muchos años para sanar y cicatrizar las múltiples heridas del cuerpo social mexicano. Calderón no tiene conciencia de los gravísimos daños sociales infligidos, y seguramente tampoco el conjunto de la clase gobernante y de la oligarquía dominante, con excepción de algunos de sus miembros que los han sufrido en carne propia o de sus familiares.

III. Estrategia anticriminal incompleta y la guerra como gran negocio

Pasemos ahora al último apartado del ensayo referido a las cinco tácticas ausentes en la estrategia anticriminal de Calderón que consideramos insustituibles para que ésta sea de hecho integral y no sólo abarque los aspectos burocrático organizativos y logísticos (cooperación y coordinación interinstitucional y con Estados Unidos y entre los tres niveles de gobierno, compra de moderno equipo técnico, de comunicación terrestre y aéreo, de armamento, de dotación de adiestramiento especializado policiaco y militar, etc.). Aspectos importantes e imprescindibles, pero a la vez muy insuficientes para elaborar una verdadera estrategia anticriminal integral.

La primera táctica faltante es una campaña permanente y amplia de prevención al consumo de drogas así como en la comisión de otros delitos entre los jóvenes y niños, como una forma de reducir esa demanda potencial y restar poder económico a los narcos. Campañas que deberían ser responsabilidad de los tres niveles de gobierno, los medios de comunicación, las iglesias, los empresarios y los centros educativos y universitarios públicos y privados. El menosprecio de esta táctica entre los monopolios de la comunicación, la industria y el comercio, así como entre las iglesias y el propio gobierno en sus tres niveles, resulta ¿criminal, negligente, sospechoso, irresponsable o

cómplice?, o póngale cada quien el adjetivo que considere correcto.

Respecto a la ausencia de una campaña de prevención en serio, cabe señalar que son tres las instituciones que cubren casi todo el territorio donde hay núcleos de población: los maestros, los militares y los sacerdotes a través del sistema educativo, militar y religioso, y por supuesto los comerciantes de todo tipo de productos y servicios. Señalo esto dado que si hubiera una política de Estado en seguridad pública, este sistema sería ideal como cadena de transmisión de valores cívicos, religiosos y educativos, cuya ausencia, la alta jerarquía burocrática del gobierno de Calderón y eclesiástica de la Iglesia católica, consideran causante de la criminalidad y drogadicción juvenil e infantil, pero no se preguntan por qué la juventud es descreída frente a la Iglesia y el gobierno. ¿Serán suficientes sólo los valores? ¿Será que las nuevas generaciones nacieron con defectos genéticos? ¿Será porque son las generaciones de las crisis económicas recurrentes y sin horizonte cercano de mejoría de sus condiciones de vida?

La segunda táctica no incluida es una campaña extensa y permanente de rehabilitación de drogadictos como manera de reducir la demanda real de drogas y el poderío material y moral del narcotráfico. De profundizarse esta acción sería un objetivo central de la estrategia antinarcóticos. Sin embargo, por ejemplo, los Centros de Integración Juvenil de la Procuraduría General de la República son simbólicos frente a la magnitud de farmacodependientes, ilustrado por el presupuesto de aquéllos dentro del presupuesto total de la PGR. El simbólico monto financiero refleja la despreocupación oficial sobre tal problema de salud pública, donde los empresarios y el conjunto de la sociedad civil mediante más organismos de beneficencia privada podrían hacer una importante contribución, dado que los Centros Nueva Vida del gobierno de Calderón también son insuficientes para la cantidad de adictos a las drogas.

La tercera táctica ausente es la participación social, la cual se insiste que existe a través de los consejos ciudadanos que en general se limitan a hacer observaciones formales más que de fondo a los informes policiacos. Es una práctica ritual que no implica verdadera participación ciudadana, como serían los policías de barrio, condominio, comunitarios¹⁰ o

¹⁰ La experiencia de la policía comunitaria de la Región de la Montaña en Guerrero ha sido poco estudiada respecto a aspectos positivos como la reducción del índice delictivo y el aumento de la confianza entre comunidad y policía, así como el bajo costo económico de mantener tal policía. Igualmente, no se ha reflexionado sobre diversas experiencias en México y otros países (Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana/CIDE, 2008).

de escuela, que sirvieran para coadyuvar con las policías, o para denunciar a las corruptas o ineptas. Táctica que hoy es muy difícil, pero no imposible, de impulsar debido a la violencia del narco, que ha generado un clima de temor o terror entre la población, y la profunda desconfianza de ésta frente a las autoridades. La famosa cultura de la denuncia o de la recompensa, o sea, denunciar un acto ilícito en proceso o que se ha cometido, o dar pistas para localizar un narcotraficante, no ha funcionado como lo reconocen las autoridades judiciales, además de que es una participación más individual que social.

Como cuarta táctica ausente tenemos la confiscación de activos financieros producto del lavado de dólares o pesos que sucede en operaciones de mayoreo o menudeo, en las casas de bolsa, así como en el sistema bancario o financiero. Cuando se confiscan narcodólares o pesos es a partir de una operación policiaca militar en una casa, laboratorio, bodega o rancho de narcos, pero no obedece a una política sistemática sino más bien es fortuita. Algunas autoridades afirman que el lavado de dinero se da principalmente en las ciudades fronterizas con Estados Unidos, en operaciones de compraventa al mayoreo o menudeo, o en las casas de bolsa, cuestión que, afirman, no sucede en el sistema bancario y financiero. México debería recibir una medalla a la transparencia a nivel mundial dado que es el único sistema que está limpio de narcodinero. La unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda debería de dar cursos a sus contrapartes en el mundo de resultar cierta la situación descrita. El menosprecio por tal táctica lo ofrece esta secretaría dado que sólo cuenta con esa unidad, con poco personal y presupuesto.

La quinta táctica no contemplada de manera integral en la estrategia anticriminal gubernamental es el rastreo y golpeteo sistemático no sólo al nervio financiero sino también al patrimonial delincencial: las propiedades inmuebles adquiridas mediante los llamados prestanombres. Debería de existir al menos una unidad especializada en cada estado que diera seguimiento a los cambios de propiedad en el Registro Público de la Propiedad para detectar compraventas sospechosas. De implementarse ambas tácticas dejarían de aparecer en la televisión y los diarios los narcos típicos (ataviados a la ranchera o de paisanos urbanos con joyas y relojes finos, armas con cachas de oro, etc.), para dar paso a aquellos que no parecen narcos: los delincuentes de cuello blanco compuestos por empresarios, funcionarios civiles, militares y eclesiásticos, entre otros personajes, todos, “honorables ciudadanos por arriba de cualquier sospecha”.

Una sexta táctica que ameritaría un debate nacional amplio e informado, al margen de falsas consideraciones

morales o de un deleznable cálculo político, es la legalización de la marihuana, debido a que, entre otros aspectos, es la droga de mayor consumo social y que más ganancias reporta al narcotráfico, lo que implicaría un golpe importante a su poder económico, político y social. Táctica que posiblemente requeriría de un acuerdo con Estados Unidos, Canadá y países centroamericanos, y que debe ser concebida como una táctica complementaria a las antes enumeradas, y no como “la táctica” definitiva y devastadora que la convertiría en estrategia (Piñeyro, 2011).

Necesariamente las tácticas explicitadas deberían ser acompañadas de un cambio radical en la política económica que genere empleo masivo y bien remunerado, y de una política social de real atención a la pobreza para los más de 55 millones de pobres y pobres extremos. Desempleados y pobres son un obvio caldo de cultivo para su paso al crimen profesional; es una especie de ejército de reserva de donde se surte el reclutamiento necesario por los narcos heridos, muertos o arrestados por las autoridades. No pretendemos, para nada, criminalizar a todos los marginados, sino señalar lo evidente: un porcentaje de 1% de los 55 millones que se pasaran a las filas criminales equivaldría a 550 mil personas¹¹. Si se pasara 10% no habría fuerzas armadas o policiacas suficientes para enfrentarlos en México o en cualquier país del mundo con una deuda social acumulada como la nuestra.

Para dar término a este artículo, resulta muy importante sólo mostrar un ángulo analítico de la guerra de Calderón del todo oculto: visualizar y analizar la guerra como cualquier guerra, como un negocio multimillonario. Pensemos en las elevadas erogaciones del presupuesto público en compras externas al complejo industrial militar norteamericano o de otras potencias (o bien adquisiciones internas), de armamento individual y pesado, uniformes, alimentación y equipo de oficina, transporte aéreo y terrestre, más los elevados sueldos y prestaciones de la alta burocracia civil y militar. Los beneficiarios, por un lado, son corporativos (compañías trasnacionales o nacionales), y por otro, sectoriales, lo que antes se llamaba la burguesía burocrática, aquélla cuyos ingresos directos e indirectos están muy por arriba de la media salarial nacional.

¹¹ A mediados del 2008, Guillermo Galván, secretario de la Defensa Nacional, reveló a diputados que 500 mil personas apoyan al narco: sembradores: 300,00; comerciantes, vigilantes, transportistas, distribuidores y narcomenudistas: 160,000; capos de diverso rango: 40,000 (*El Universal*, 9 de agosto de 2008). A esta especie de narcoejército hay que agregar bases de apoyo social de otras actividades criminales (tráfico de autos, armas, migrantes, mujeres, niños, órganos humanos, mercancías, etc.) hasta ahora no aproximadas por ninguna autoridad, pero que nos dan una idea del amplio apoyo social con que cuenta el crimen profesional.

A las compañías beneficiarias extranjeras por compras gubernamentales externas o internas, hay que agregar aquellas que se benefician por asignación directa del gobierno norteamericano a través de las adquisiciones de la parte de los mil 400 millones de dólares trasferidos en diverso equipo aéreo y de otro carácter a través de la llamada Iniciativa Mérida o Plan México (Subcomandante Marcos, marzo de 2011), impulsada por el gobierno norteamericano y avalada por el mexicano, con considerables costos para la ya mermada soberanía nacional y del Estado en el plano territorial, institucional y político, la otra cara de la moneda de la tragedia nacional aquí bosquejada y analizada.

Referencias

Arango, A. (5 de septiembre de 2011). "Las estadísticas del horror". *Proceso*, (1807).

Barra, A. y Joloy, D. (2011). "Children: The Forgotten Victims in México's Drug War". En Barrett, D. (ed.), *Children of the Drug War. Perspectives of the Impact of Drug Policies on Young People*. The International Debate Education Association. USA.

Bastidas Colinas, S. (25 de agosto de 2009). "El dinero para la guerra de Calderón". *El País*.

Benítez Manaut, R. (16 de febrero de 2010). "Ciudad Juárez. Zona de guerra". *Radio Nederlands en Español*. Recuperado de <www.rnw.nl>.

Benítez Manaut, R. (coord.). (2009). *Atlas de la seguridad y la defensa, 2009*. México: Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia.

Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana/CIDE (2008). *Memoria, Seminario Internacional. La relación entre la policía y la comunidad. Su impacto sobre la eficiencia policial*. México: Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana/CIDE.

Ibarra A., E. (13 de enero de 2012). "Las estadísticas de la PGR". *Forum@Forumenlinea*.

Kliksberg, B. (mayo-junio de 2008). "¿Cómo enfrentar la inseguridad en América Latina?: la falacia de la mano dura". *Nueva Sociedad*, (215).

López Portillo, E. (16 de marzo de 2010). "¡194,500,000,000.00!". *El Universal*.

Méndez, L. y Quiroz, O. (julio-agosto de 2010). "Oligarquía y sindicalismo en México (1983-2010)". *El Cotidiano*, (162).

Pérez Correa, C. (junio de 2011). "Huérfanos, cárceles y drogas: las secuelas de la guerra vs el narcotráfico". *Distintas Latitudes. Revista de Reflexión Latinoamericana*, (17).

Pérez, A. L. (junio de 2011a). "Levantados, la otra cara del narcotráfico". *Contralínea*, (187).

Pérez, A. L. (junio de 2011b). "Paso del Norte, tierra de levantones". *Contralínea*, (188).

Piñeyro, J. L. (2010). "Las Fuerzas Armadas Mexicanas en la seguridad pública y la seguridad nacional". En Alvarado, A. y Serrano, M. (coords.), *Seguridad nacional y seguridad interior*. México: El Colegio de México (Colección Los Grandes Problemas de México Tomo xv).

Piñeyro, J. L. (2011). "¿Legalización de todas las drogas en México?, ¿Estrategia o táctica?". En Cansino, C. (coord.), *Narcotráfico y violencia en el México actual*. Puebla: Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla/Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Poder Ejecutivo Federal (2010). *Diálogos por la seguridad. hacia una política de Estado. Sesión de trabajo con los ejecutivos estatales*. 22 de agosto.

Rodríguez Lascano, J. (septiembre de 2011). "El dolor de las víctimas, la indiferencia del poder". *Rebeldía*, (78).

Subcomandante Marcos (marzo de 2011). "Apuntes sobre las guerras". *Rebeldía*, (76).

* * *

Seguridad Nacional

El esquema de Seguridad Nacional tampoco escapó al desmantelamiento ocurrido en otras instituciones

A partir de su toma de posesión Ernesto Zedillo olvidó los esfuerzos desarrollados en materia de seguridad nacional por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, como el instrumento global creado para enfrentar los riesgos que afrontaba la seguridad nacional, así como la cooperación más estrecha con Estados Unidos.

Ernesto Zedillo dejó en el olvido el Programa Nacional para el Control de Drogas, un proyecto integral y multilateral creado en enero de 1992 y que funcionó a plenitud hasta antes de su gobierno. Zedillo creó su propio programa pero siempre fue letra muerta.

El Instituto Nacional para el Control de Drogas fue convertido en una Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS); y el Centro Nacional para el Control de Drogas (Cendro) se puso bajo el control de la Sedena, posteriormente de la Secretaría de Marina, hasta devenir en una instancia inoperante de la PGR.

Si bien no desapareció completamente, sí fue deformado el Programa Nacional de Seguridad Pública establecido en 1986 como un programa de alto aliento, con la intención de institucionalizar los cuerpos policíacos a nivel nacional.

La iniciativa "postura de México para un nuevo compromiso internacional para el control de drogas", presentada ante la Asamblea General de la ONU, aprobada el 28 de octubre de 1993, desapareció de las agendas de trabajo por la falta de atención de la representación ante ese organismo, del gobierno de Ernesto Zedillo y posteriormente de las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón, periodos en los que tampoco se cumplió con la creación del Centro de Inteligencia Criminal (CIC).

Elaborado por Carmen Silvia Zepeda Bustos.